



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, treinta de enero de dos mil veintitrés**

#### **21-059**

Proceso: **APELACIÓN SENTENCIA**  
Demandante: **ALVARO DE JESÚS OROZCO**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05001-31-05-019-2019-00594-01**  
Tema: **Pensión de invalidez**  
Decisión: **REVOCA Y CONDENA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Se reconoce personería al doctor **NESTOR EDUARDO PANTOJA GOMEZ** identificado con c.c. 1.085.288.587 y TP 285.871 del C.S. de la J. para que represente los intereses de **COLPENSIONES** conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora **MARICEL LONDOÑO RICARDO**, identificada con c.c. 29.105.874 y TP. 191.351 del C. S de la. J en su calidad de Representante Legal de la Sociedad **MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S.** quien, a su vez, actúa como Apoderada General de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, según E.P. No. 3374 de fecha 2 de septiembre de 2019 de la Notaria 9ª del Circulo Notarial de Bogotá D.C.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 002** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

##### **1.1.LO PRETENDIDO**

**Pretende** el demandante que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, es decir, desde el 18 de mayo de 2018, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que mediante dictamen emitido el 14 de enero de 2019 por COLPENSIONES se le calificó una pérdida de capacidad laboral del 68.20%, con fecha de estructuración 15 de mayo de 2018.
- Que aportó a COLPENSIONES un total de 642.86 semanas y contaba con más de 300 semanas de cotización al 1º de abril de 1994.
- Que el 13 de junio de 2019 solicitó a COLPENSIONES la pensión de invalidez, la cual le fue negada a través de Resolución SUB 149269 del mismo año, con el argumento que no tenía las semanas necesarias para acceder a la prestación.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos aceptó el contenido del dictamen que le calificó la pérdida de capacidad laboral, la solicitud de la pensión, el contenido de la resolución que le negó la pensión de invalidez. De otro lado indicó que no es cierto que el actor acredite las semanas para acceder a la pensión de invalidez. Frente a los demás hechos señaló que no le constan por lo que serán objeto de debate probatorio.

## **1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 25 de febrero de 2021 **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas por el señor **ÁLVARO DE JESÚS OROZCO**, a quien condenó en costas, fijando las agencias en derecho en la suma de \$300.000

## **2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES**

## **2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ**

Manifestó que se encuentra probado que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO no tiene acreditados los requisitos para acceder a la pensión de invalidez conforme a la norma vigente a la fecha de estructuración, esto es, la Ley 860 de 2003, toda vez que no acreditó el requisito de 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues en este lapso no cotizó ninguna semana.

Agregó que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que cuando el afiliado no acredita los requisitos exigidos en la norma vigente, es posible la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y acudir a la norma inmediatamente anterior al cambio legislativo, sin que sea posible hacer una búsqueda en el tiempo de la norma que más convenga y también ha impuesto un límite temporal a la aplicación de dicho principio como se hizo en sentencia SL 4650 de 2017, cuando se indicó que solo era posible acudir al mismo cuando la invalidez se estructure dentro de los 3 años siguientes al cambio legislativo impuesto por la Ley 860 de 2003, es decir, antes del 26 de diciembre de 2006.

Por tanto, en el caso de autos como la invalidez del actor se estructuró el 18 de mayo de 2018 la norma aplicable es la Ley 860 de 2003, sin que sea posible hacer un salto normativo al Decreto 758 de 1990, puesto que esta no es la norma inmediatamente anterior a la vigente a la fecha de estructuración, por lo que concluyó que no era posible reconocer la pensión de invalidez y por lo tanto ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

## **2.2. APELACIÓN DEMANDANTE**

Manifestó que se deben acoger las sentencias de la Corte Constitucional en su función de unificación de la jurisprudencia, con lo son la 442 de 2016 que establece parámetros o reglas con relación al principio de la condición más beneficiosa cuando quien pretende que se la aplique es quien ha estructurado su invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003, para acudir a los reglamentos del Decreto 758 de 1990.

Indicó que conforme a la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del artículo 230 de la Constitución Política, que indica que el juez en sus providencias está atado al alcance de la Ley, esto incluye todo el ordenamiento jurídico y las reglas que emanan de las Altas Cortes y más de la Corte Constitucional, debe darse aplicación a las sentencias de unificación 442 de 2016 y 556 de

2019, en torno a la aplicabilidad de la condición más beneficiosa de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, dado que estas sentencias tienen fuerza vinculante para los jueces.

De otro lado adujo que en el caso de autos no puede desconocerse que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 68.20% con fecha de estructuración del 18 de mayo de 2018 y desde la demanda se indica que no cumple con los requisitos de la Ley 860 de 2003, ni de la Ley 100 de 1993, sino que cuenta con más de 300 semanas al 1º de abril de 1994, presupuestos bajo los cuales se inició el presupuesto conforme a la sentencia SU-442 de 2016 que regulaba la aplicación del principio de la condición más beneficiosa estableciendo como único requisito, que se el afiliado hubiera cotizado más de 300 semanas en vigencia del Decreto 758 de 1990, es decir, que había forjado una expectativa legítima, requisito que cumple el actor, por lo que se le debe reconocer la prestación respetando el principio de igualdad y seguridad jurídica, pues si bien en noviembre de 2019 se profirió la sentencia SU-556 de 2019 en donde la Corte Constitucional creó el test de vulnerabilidad para poder aplicar la condición más beneficiosa de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, estableciendo 4 requisitos adicionales, los cuales cumple el actor, por tratarse de una persona de 73 años de edad que padece una enfermedad catastrófica y degenerativa, además está probado que la carencia de la pensión afectaría su mínimo vital y que no pudo volver a cotizar debido a su estado de salud ya que padece una enfermedad grave, que es oxígeno requirente desde hace varios años que no le han permitido continuar laborando, pues se desempeñaba como vigilante, como se desprende del propio dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Por consiguiente solicita se revoque la decisión de primera instancia y se reconozca la pensión de invalidez, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

### **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE COLPENSIONES**

Si bien el apoderado de la entidad demandada presentó escrito de alegatos de conclusión, los mismos no se tendrán en cuenta, dado que estos están dirigidos a que se declare inexistente la obligación de pagar el retroactivo de la pensión de vejez, esbozando varios argumentos para sustentar su tesis; sin embargo, en el presente proceso se pretendía era el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, tema disímil al de los alegatos de conclusión, pretensión de la que incluso fue absuelta la demandada.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar debe recordarse respecto de la normatividad con la cual debe dirimirse el derecho a la pensión de invalidez que la ley, en concordancia con la jurisprudencia, tiene establecido que debe ser la vigente a la fecha de estructuración de tal estado, así lo ha indicado en múltiples pronunciamientos, entre ellos las sentencias de radicación 42029, 35455 y 33185 proferidas por la Sala de Casación Laboral.

Aclarado lo anterior, conforme se aprecia a folio 33/35 del archivo 01 del expediente digital, el día 14 de enero de 2019 el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO fue objeto de calificación por parte del departamento de Medicina Laboral de COLPENSIONES, donde se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 68.20% de origen común, con fecha de estructuración el 18 de mayo de 2018.

Inicialmente habría de acudir a la norma vigente para aquel año, que no es otra que el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, preceptiva según la cual, en caso de invalidez el afiliado debe haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de tal estado.

En el caso de autos, conforme la Historia Laboral obrante en el proceso, visible a folios 26/29 archivo 01 del expediente digital, el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO cotizó a COLPENSIONES 642.86 semanas, como lo reconoce COLPENSIONES en la Resolución SUB 194269 del 23 de julio de 2019 a folio 38. Sin embargo, ninguna de esas semanas fue cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, entre el 18 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2018, toda vez que el actor cesó sus aportes el 31 de marzo de 2011.

Por consiguiente, desde la demanda se solicitó aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el cual opera en casos donde el solicitante de la pensión de invalidez, no cuenta con la densidad de semanas exigidas por la normatividad vigente a la fecha de estructuración del estado de invalidez para causar la prestación que ampara tal riesgo, como ocurre en el presente caso, por lo que se solicita se aplique el Decreto 758 de 1990 por serle más favorable.

Frente a la aplicación del principio aludido, considera la Sala que éste se encuentra contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política y ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Suprema de

Justicia; según el mismo, cuando la nueva normatividad impone requisitos más gravosos y el afiliado había dejado acreditados los requisitos en vigencia de la normatividad que precedía se puede dar aplicación a la norma anterior por serle más favorable.

Así mismo, es importante señalar que si bien es cierto que inicialmente dicho criterio jurisprudencial en torno del llamado '*principio de la condición más beneficiosa*' en materia de pensiones de invalidez y sobrevivientes fue limitado a las situaciones ocurridas en vigencia de las normas originales de la Ley 100 de 1993 y que, por tal razón, ameritaban acudir a las que gobernaron el esquema normativo inmediatamente anterior, esto es, al Decreto 758 de 1990, también lo es que en sentencia hito de 25 de julio de 2012 con Radicación 38674, tal criterio de protección fue ampliado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el referido principio también tenía cabida en tratándose de preceptivas inmediatamente sucesivas, como lo son las previstas en las normas que han modificado los regímenes pensionales del Sistema General de Pensiones de la citada Ley 100 de 1993, esto es, las de las leyes 797 y 860 de 2003, respectivamente. Y posteriormente en sentencia 44596 del 25 de enero de 2017 (SL 2358-2017) unificó el criterio imperante en la materia, y adocrinó que, en controversias relativas a pensiones de invalidez, para que se aplique el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, en lugar del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, cuando no se tengan las 50 semanas cotizadas en los tres últimos años a la fecha de estructuración del estado de invalidez, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, analizando los eventos que permitirían acceder a la pensión de invalidez y estableciendo un límite temporal para la aplicación del mismo, indicado que solo procede para situaciones en que el estado de invalidez se hubiera estructurado dentro de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en vigencia de la citada Ley 860 de 2003, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

En el caso de autos el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO no cumple los requisitos establecidos en dicha sentencia, pues no se encontraba cotizando ni a la fecha de estructuración de la invalidez ni a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, ni tiene semanas cotizadas en el último año anterior a estos eventos, pues su último aporte data de 31 de marzo de 2011, por lo que no es posible darle aplicación a la Ley 100 de 1993.

Por otro lado, la Corte Constitucional a través de sentencia SU 442 de 2016, dictada el 18 de agosto de esa misma anualidad, permitía la aplicación del principio de la condición más beneficiosa sin ningún tipo de límite temporal, pues incluso se permitía el salto normativo, para el estudio de casos donde estuviera involucrada la pensión de invalidez estructurada en vigencia de Ley 860 de 2003, no solo hacia la normativa inmediatamente anterior -art. 39 de la Ley 100 de 1993, sino incluso hasta la previsiones consagradas en el Decreto 758 del mismo año, para establecer tal posibilidad en

beneficio de los afiliados que no cumplieran con el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración del infortunio en cita. En la descrita providencia a este respecto se indicó:

*“Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia. Por lo demás, una vez la jurisprudencia ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la pensión de invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, no puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo, a menos que se ofrezcan razones poderosas suficientes que muestren que: (i) la nueva posición tiene mejor sustento en el orden legal y constitucional, (ii) los argumentos para apartarse priman sobre los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad de trato que están a la base del respeto al precedente constitucional, y (iii) está en condiciones de desvirtuar la prohibición de retroceso injustificado en materia de derechos sociales fundamentales, establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Hasta el momento no se han aportado razones de esta naturaleza, por lo cual la jurisprudencia de esta Corte, encargada de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución, se mantiene y es vinculante para todas las autoridades, incluidas las judiciales (CP. Art. 241).”*

Empero, con posterioridad la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-556 de 2019, recordó que la jurisprudencia suplió el vacío del legislador al no establecer un régimen de transición ante un intempestivo cambio normativo, pues sólo lo hizo respecto de la pensión de vejez, no así la de invalidez o sobrevivientes, permitiendo su modificación de manera abrupta o arbitraria, cercenando expectativas legítimas. Por ello, y siendo más garantista que la Corte Suprema de Justicia, avaló la aplicación ultractiva de requisitos previstos en leyes derogadas, que no necesariamente se circunscribían a la inmediatamente anterior, consintiendo así, contrario a la jurisprudencia pacífica de su homóloga, una búsqueda por el esquema normativo, tesis plasmada en sentencias como la SU-442 de 2016 y SU-005 de 2018, que diferían en cuanto a la flexibilización del análisis de requisito de subsidiariedad cuando respecto de cierto caso se examinaba la viabilidad de una acción de tutela, y de otro lado, concretamente la última de ellas, establecía un test de procedencia.

Es por esto, que en la sentencia SU-556 de 2019, la Corte Constitucional, quiso unificar la diversidad de criterios frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, al estimar que la sentencia SU-442 de 2016 no previó parámetros homologables para valorar la exigencia de subsidiariedad de la acción de tutela en este tipo de asuntos, por lo que en dicha providencia se estableció un test de procedencia, para efectos de permitir que a un afiliado se le apliquen los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990, cuando ostentando la calidad de inválido, no satisface los regulados en la Ley 860 de 2003, a saber:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las

	siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
<b>Segunda condición</b>	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
<b>Tercera condición</b>	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
<b>Cuarta condición</b>	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

En dicha providencia, además, la Corte fundamentó esta tesis, en que el Acto Legislativo 01 de 2005 se expidió con el fin de preservar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, privilegiando la aplicación de la norma vigente al acaecimiento de la contingencia protegida por cada subsistema, razón por la que habría una carga desproporcionada para las entidades y/o fondos de pensiones, pues de no ponerse una limitante, no sería *“posible determinar, a ciencia cierta, el número de personas que pudieran reclamar, ad finitum”* la aplicación de una norma cuya vigencia expiró hace más de dos décadas, aunado a que expectativas legítimas tampoco podían ser inalterables como si fuesen derechos adquiridos, expectativas que surgían para quienes habiendo reunido la densidad de semanas de cotización para pensionarse por invalidez en un régimen, su condición se estructuraba en otro y veían resquebrajada la confianza legítima como destinatarios de esa primigenia norma.

Es así como la Corte Constitucional concluyó que dicha expectativa debía ser salvaguardada pero únicamente frente a la población vulnerable, desechando la postura o *“zona de paso”* de la Corte Suprema de Justicia, pues respecto de este contingente de la población, implicaba una afectación a derechos fundamentales como la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas. Concluyendo que la regla fijada en la sentencia SU-442 de 2016, según la cual el principio de la condición más beneficiosa da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las disposiciones del Decreto 758 de 1990 a aquellos afiliados cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, solo es aplicable a los afiliados en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen el test de procedencia.

Desde la demanda se pretende la aplicación ultractiva del Decreto 758 de 1990, dado que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO cotizó más de 300 semanas en vigencia de dicha norma, pues según se desprende de la historia laboral visible a folios 26/29, así como de la Resolución SUB 194269 del 23 de julio de 2019 a folio 38 archivo 01 del expediente digital, para el 1º de abril de 1994 contaba con 428 semanas cotizadas, así:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
GALPON BELLAVISTA LTDA	19730616	19731231	TIEMPO SERVICIO	199
GALPON BELLAVISTA LTDA	19740101	19741130	TIEMPO SERVICIO	334
GALPON BELLAVISTA LTDA	19741201	19760409	TIEMPO SERVICIO	496
PELAEZ LARA Y CIA LTDA	19760426	19760611	TIEMPO SERVICIO	47
GRILL MAGNATES	19780712	19780723	TIEMPO SERVICIO	12
GALPON BELLAVISTA LTDA	19781019	19790531	TIEMPO SERVICIO	225
GALPON BELLAVISTA LTDA	19790601	19801231	TIEMPO SERVICIO	580
GALPON BELLAVISTA LTDA	19810101	19810430	TIEMPO SERVICIO	120
GALPON BELLAVISTA LTDA	19810501	19820827	TIEMPO SERVICIO	484
EDIF LA PLAZUELA	19821206	19830131	TIEMPO SERVICIO	57
EDIF LA PLAZUELA	19830201	19830309	TIEMPO SERVICIO	37
P Y R LTDA	19830727	19830809	TIEMPO SERVICIO	14
CASTRILLON RENDON JOSE V	19840921	19841117	TIEMPO SERVICIO	58
FINCA EL CAVAO	19850101	19850628	TIEMPO SERVICIO	179
MADERAS DIMA LTDA	19920914	19921221	TIEMPO SERVICIO	99
UNIFLOR LTDA	19930416	19930607	TIEMPO SERVICIO	53

DIAS	2994
SEMANAS	428

Ahora, para poder reconocer la pensión de invalidez al demandante conforme al Decreto 758 de 1990 a pesar de que su invalidez se estructuró el 18 de mayo de 2018, esto es, en vigencia de la Ley 860 de 2003 es imperioso que el demandante supere el test de vulnerabilidad establecido en la sentencia SU-556 de 2019 y si bien la prueba no estuvo encaminada a demostrar que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO cumplía los presupuestos del test de vulnerabilidad establecido en la referida sentencia, la cual es posterior a la radicación de la demanda, estima la Sala que dentro del acervo probatorio hay elementos que permiten determinar que el demandante se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Conforme a lo anterior, se entra a analizar si el demandante cumple los requisitos del test de vulnerabilidad establecido en la sentencia SU-556 de 2019, así:

- i) Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.

Conforme la prueba recaudada, se puede establecer que el accionante cumple con la primera condición establecida en la sentencia en mención, toda vez que pertenece a un grupo de especial protección constitucional y se encuentra en una situación de riesgo, pues en la actualidad tiene más de 75 años de edad, toda vez que nació el 2 de octubre de 1947 (fl 45 archivo 01 expediente digital), es decir merece protección dada su condición de vejez, además de ser una persona en situación de invalidez con una pérdida de capacidad del **68.20%**, originada en una enfermedad catastrófica y degenerativa, como se lee en el dictamen a folios 33/35 del expediente digital, por lo que es evidente que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO se encuentra en una situación que lo hace una persona vulnerable y como tal merece una especial protección constitucional.

ii) Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.

Así mismo puede establecerse, que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, pues en el mismo dictamen, se señala que el demandante se encuentra desempleado, teniendo alta afectación en su rol laboral, que no es funcional en quehaceres del hogar, que es oxígeno requirente, e incluso se dejó consignado que requiere de dispositivos de apoyo para realizar sus actividades de la vida diaria y que también requiere de terceras personas para realizar sus actividades de la vida diaria, como se ve:

7. CONCEPTO FINAL DEL DICTAMEN PERICIAL			
Perdida de capacidad laboral	=	TITULO I (Valor Final Ponderada)	+ TITULO II (Valor Final) = Valor Final
		38.70	29.50 68.20
FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: 18/05/2018			
Sustentación fecha de estructuración : Con los datos aportados en la historia clínica y ayudas diagnósticas se procede a realizar la pérdida de la capacidad laboral según decreto 1507 del 12/08/2014 con fe: 18/05/2018 según valoración por Neumología			
ORIGEN: COMÚN			
FECHA DE ACCIDENTE :			
CLASIFICACIÓN CONDICIÓN DE SALUD - TIPO DE ENFERMEDAD			
REQUIERE DE TERCERAS PERSONAS PARA DECIDIR POR SI MISMO (DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA):NO			
REQUIERE DE DISPOSITIVOS DE APOYO(Para realizar sus actividades de la vida diaria): SI			
REQUIERE DE TERCERAS PERSONAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:SI			
TIPO DE ENFERMEDAD:			
¿Enfermedad degenerativa, progresiva y crónica? SI			
¿Catastrófica, alto costo, ruinosa? NO			
¿Enfermedad congénita o cercana al nacimiento? N/A			
PCL/PCO: REVISABLE: NO APLICA			

Además que por su avanzada edad y la gran afectación que tiene en su salud, no le permite incorporarse al mercado laboral, por lo que se evidencia que la falta de la pensión afectaría directamente su mínimo vital, ya que no se encuentra en capacidad para procurarse unos ingresos que le permitan subsistir en forma digna.

iii) Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez

En cuanto este requisito, se tiene que al concatenar la historia laboral del actor con la descripción que se hace en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y la historia clínica allegada con el expediente administrativo (archivo 03 expediente digital), se puede determinar que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO no pudo cotizar las semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, pues según lo describe el propio dictamen, este se desempeñaba como vigilante y desde el 2006 al 2011 realizó aportes como trabajador independiente, sin embargo, según la historia clínica a folio 265, en

consulta del 2 de febrero de 2018 se deja constancia que el deterioro en salud inició hace unos 6 años, lo que coincide con la fecha en que se cesaron sus aportes, además que según el dictamen, el señor OROZCO desde el 2017 tiene oxígeno domiciliario, lo cual le impidió reincorporarse al mercado laboral y continuar realizando aportes a pensiones, a pesar de que había realizado aportes de manera constante durante muchos años, alcanzando más de 643 semanas, en los últimos años, no realizó aportes debido a sus condiciones de salud y su avanzada edad, lo que se tradujo en que para la fecha en que se estructuró su invalidez no se encontraba cotizando y tampoco lo había hecho en los 3 años anteriores.

Aunado a lo anterior, es claro que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO realizó sus últimos como independiente y que quizás ante la falta de empleo no contaba con la capacidad económica de continuar sufragando las cotizaciones, pues según se verificó en la página del sisben este está clasificado como B3 que corresponde a pobreza moderada y según certificado visible a folio 211 del archivo 04 se encuentra afiliado en salud como beneficiario de su hijo en el régimen exceptuado de las fuerzas militares. Según se ve:

Registro válido

Fecha de consulta: 23/01/2023

Ficha: 05129020556200000507

B3

GRUPO SISBÉN IV  
Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: ALVARO DEJESUS

Apellidos: OROZCO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 15251360

Municipio: Caldas

Departamento: Antioquia

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 26/08/2019

Última actualización ciudadano: 05/09/2019

Última actualización via registros administrativos:

\*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

A1→A5  
Pobreza extrema

B1→B7  
Pobreza moderada

C1→C18  
Vulnerabilidad

D1→D21  
Ni pobre ni vulnerable

11



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN  
GRUPO AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

COLPENSIONES  
2019-2919363  
13/06/2019 10:20:00 AM  
MEDELLIN SUR  
ANTIOQUIA - MEDELLIN  
RECONOCIMIENTO  
IMAGENES:20  
020197919363-SD

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

CERTIFICA

Consecutivo: 566353

Que el (la) señor(a) SLP. JHONY ARBEY OROZCO ROJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1035225142 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través de COMANDO EJERCITO NACIONAL, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001.

Beneficiario(s):

Nombres y Apellidos	Tipo	Documento	Parentesco	Plan afiliación	Estado
ALVARO DE JESUS OROZCO CC		15251360	PADRE	Beneficiario	Activo

La presente certificación se expide como constancia de que el (la) mencionado(a) usuario(a) se encuentra ACTIVO(A) en la Base de Datos de afiliados y beneficiarios.

Lo anterior en cumplimiento al Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016, artículo 2.1.3.14 el cual citó, "Afiliaciones múltiples. En el sistema general de seguridad social en salud, ninguna persona podrá estar inscrita en más de una EPS o EOC ni ostentar simultáneamente las calidades de cotizante y beneficiario, cotizante y afiliado adicional o beneficiario y afiliado adicional, afiliado al régimen subsidiado y cotizante, afiliado al régimen subsidiado y beneficiario o afiliado al régimen subsidiado y afiliado adicional. Tampoco podrá estar afiliado simultáneamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a un régimen exceptuado o especial".

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000 en su Artículo 24 parágrafo 4º, dispone que "No se admitirá como beneficiarios del SSMP a los cotizantes de cualquier otro régimen de salud".

NOTA: ESTE CERTIFICADO NO ES VÁLIDO PARA REALIZAR APORTES ANTE ADRES.

Dada en Bogotá D.C., el día 10 de julio de 2019.

Capitán JORGE ANDRES PRADA MUR  
Coordinador Grupo de Afiliación y Validación de Derechos  
Dirección General de Sanidad Militar



iv) Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Finalmente, también se acreditó que el demandante tuvo una actuación diligente al solicitar la pensión de invalidez a COLPENSIONES, desde el 13 de junio de 2019, un mes después de que fue notificado del dictamen de pérdida de capacidad laboral, tal como se verifica en la Resolución SUB 194269 de 2019 (fl 38) a través de la cual se le negó la pensión de invalidez.

Por tanto, concluye la Sala que el señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO supera el test de vulnerabilidad de la SU-556 de 2019 y que por tanto frente a este es dable reconocer la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa acudiendo a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 a pesar de que la prestación se causó en vigencia de la Ley 860 de 2003, pues además se cumplen los requisitos establecidos en el aludido Decreto toda vez que cotizó en vigencia del mismo, esto es, antes del 1º de abril de 1994, un total de 428 semanas, por lo que tiene derecho a que se aplique la condición más beneficiosa y se reconozca su pensión conforme el artículo 6º del Decreto 758 de 1990.

Así las cosas se **REVOCARÁ** la sentencia de primera instancia y en su lugar se **CONDENARÁ** a **COLPENSIONES** a reconocer la pensión de sobrevivientes al señor **ÁLVARO DE JESÚS OROZCO**, a partir del **18 de mayo de 2018**, fecha de estructuración de la invalidez, conforme al artículo 40 de la Ley 40 de la Ley 100 de 1993, dado que con posterioridad a esa fecha el actor no percibió ningún subsidio por incapacidad pues se encontraba afiliado en calidad de beneficiario de su hijo y además pro cuanto ninguna mesada se vio afectada de prescripción, toda vez que el dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral le fue notificado el 16 de mayo de 2019, solo a partir de esa fecha la prestación se hizo exigible, pues a partir de allí el actor tenía certeza de su condición de invalido, el demandante solicitó la pensión el 13 de junio de 2019 (fl 38), misma que le fue negada a través de Resolución SUB 194269 del 23 de julio de 2019 y la demanda se radicó el 17 de octubre de 2019 (fl 25), antes de que transcurriera el termino trienal de que trata el artículo 151 del CPT y la SS.

Por tanto, COLPENSIONES adeuda al señor ÁLVARO DE JESÚS OROZCO un retroactivo de **\$54.736.259** por las mesadas causadas entre el 18 de mayo de 2018 y el 31 de enero de 2023 y a partir del 1º de febrero de 2023 continuará reconociéndole una mesada equivalente al salario minino, a razón de 13 mesadas anuales. Así:

Año	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2018	8 y 13 días	\$ 781.242	\$ 6.588.474
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	1	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
TOTAL			\$ 54.736.259

Se autoriza a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional que pague en cumplimiento de esta sentencia, el porcentaje destinado a los **aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud**, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema. Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 54480 y 46234.

De otro lado en relación los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del

resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Bajo este contexto, la Sala examinó el contenido de la resolución expedida por la entidad, encontrando que la negativa en el otorgamiento de la pensión de invalidez estuvo amparada en la aplicación de la ley sin el alcance dado por la Corte Constitucional en las sentencias referidas por lo que no es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios.

No obstante lo anterior, el retroactivo reconocido por la entidad deberá ser indexado teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de disfrute de cada mesada y como índice final el vigente a la fecha del pago total de la obligación, aplicando la siguiente fórmula: Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital.

Mutatis mutandis dicho criterio debe aplicarse también respecto a las costas procesales, dado que la decisión adoptada en la Resolución en comentario y la consecuente necesidad del demandante de acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar el derecho prestacional, no obedeció a un capricho de la entidad, sino, se insiste, al acatamiento de la ley, y por tanto considera la Sala que no hay lugar al reconocimiento de costas procesales en ninguna de las instancias.

En consecuencia, la sentencia será REVOCADA de conformidad con lo analizado en precedencia.

Sin costas en esta instancia.

#### **4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

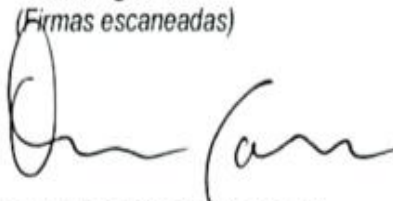
**DECIDE**


**PRIMERO: REVOCA** la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar se y en su lugar se **CONDENA a COLPENSIONES**, a reconocer y pagar al señor **ÁLVARO DE JESÚS OROZCO** la pensión de invalidez a partir del **18 de mayo de 2018**, en cuantía de un salario mínimo, adeudándole la suma de **\$54.736.259** como retroactivo liquidado hasta el hasta el 31 de enero de 2023, monto que será **INDEXADO** al momento del pago y respecto del cual se **AUTORIZA a COLPENSIONES** a descontar el porcentaje con destino a la **EPS** a la que el demandante se encuentre afiliado. Y a partir del 1º de marzo de 2023 deberá continuar reconociéndole una mesada equivalente al salario mínimo, a razón de 13 mesadas anuales.


**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **ALVARO DE JESÚS OROZCO**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05001-31-05-019-2019-00594-01**  
Decisión: **REVOCA Y CONDENA**  
Fecha de la sentencia: **30/01/2023/**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **31/01/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario